

Elecciones decisivas: entre la deriva autoritaria y el rescate de la promesa republicana

*Decisive elections: between authoritarian drift
and the rescue of the republican promise*

Gino Costa Santolalla¹

© El autor. Artículo de acceso abierto,
distribuido bajo los términos de la Licencia
Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.



DOI: <https://doi.org/10.20453/ah.v68i2.7508>

A solo cuatro meses de los comicios del 12 de abril de 2026, la incertidumbre producto de la fragmentación y la desafección política marcan los preparativos de la carrera electoral. Según la última encuesta de Ipsos, del 7 de noviembre de 2025, Rafael López Aliaga sigue encabezando las preferencias con apenas 9 % de intención de voto, seguido de Keiko Fujimori y Mario Vizcarra (hermano de Martín Vizcarra) en un cercano y disputado segundo lugar. Más abajo figuran Carlos Álvarez (4 %), César Acuña (3 %) y Alfonso López Chau (3 %). Cierran el pelotón el nutrido grupo del 2 %, integrado por George Forsyth, Carlos Espá, Rafael Belaunde, Phillip Butters, Alfredo Barnechea y Javier Velásquez Quesquén. Veintisiete candidatos más se reparten otros 12 puntos porcentuales. Un poco menos de la mitad de los electores aún no sabe por quién votará. Curiosa paradoja: treinta y nueve aspirantes presidenciales —una cifra récord— en medio del desaliento general.

Si la intención del voto presidencial es un buen predictor del voto parlamentario, solo los partidos representados por López Aliaga, Fujimori y Vizcarra tendrían representación en el nuevo Congreso. Ninguno de los otros postulantes supera el 5 % de la valla electoral. Es

cierto que es muy temprano para estas proyecciones, pero no es un escenario improbable, pues ya Alfredo Torres y Fernando Tuesta alertaron que, con las nuevas exigencias de la valla y la ausencia de elecciones primarias, muy pocos partidos tendrán bancada congresal. Es probable que este número crezca, pero seguramente no mucho más. En las elecciones de 2021, López Aliaga llegó tercero y Fujimori quedó segundo por tercera vez consecutiva. No sorprendería que vuelvan a ubicarse entre los primeros. Y, en cuanto a Vizcarra, ha sido el presidente más popular después de Alberto Fujimori. Las preguntas son si mantendrá su popularidad, después de su inquestionable condena judicial, y si podrá endosarla a su hermano. Fujimori lo pudo hacer con su hija, hasta cierto punto.

Como recordó Torres, de Ipsos, en *Perú21*, el 19 de octubre pasado, en todas las elecciones presidenciales desde 1980, salvo las que ganaron Alberto Fujimori en 1990 y Pedro Castillo en 2021 —esto es, en ocho de diez—, el candidato victorioso se había ubicado entre los cinco primeros lugares con más de 10 % de intención de voto seis meses antes. En estos comicios, ni siquiera el puntero alcanza los dos dígitos a cinco meses de la elección. Estamos, pues, ante un escenario más bien proclive a las sorpresas, a los *outsiders*, en el que cualquiera podría ganar, especialmente alguien que aún no aparece como posible vencedor. La pregunta es

¹ Ph. D. en Relaciones Internacionales por la Universidad de Cambridge e investigador afiliado al Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Excongresista y exministro del Interior.

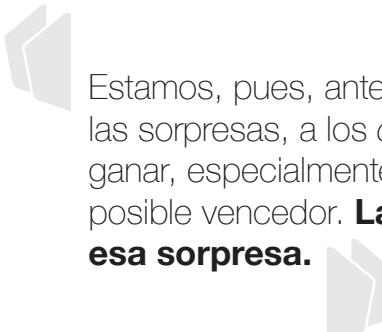
quién podría ser esa sorpresa. Según Torres, la sorpresa podría parecerse a Castillo, en el sentido de que el voto identitario andino podría volver a ser decisivo en la primera vuelta.

Juega a favor de esa posibilidad el que no solo los electores del profesor cajamarquino, sino una buena parte del país considere, equivocadamente creo yo, que fue víctima de un golpe de Estado y no su único responsable. Para muchos, las próximas elecciones podrían ser la oportunidad de vengarlo y de vengarse por el supuesto despojo de su victoria electoral, puesta en cuestión desde el momento mismo en que se le intentó escamotear bajo la absurda tesis del fraude. Aunque Castillo no puede ser candidato a la presidencia por la condena judicial por el autogolpe del 7 de diciembre de 2022, buscará endosar su respaldo a quien pueda librarlo de la cárcel. Lo hará en primera vuelta entre algunos de sus allegados, al que tenga mayores posibilidades de éxito o a quien termine representando el voto identitario andino, si es que aparece; y, en segunda vuelta, a cualquiera que

encuestas, lo que refleja más de un problema en ese sector, a pesar de la popularidad de Castillo o precisamente por ella, porque el hecho de que Castillo sea hoy su principal referente tiene sus bemoles. A diferencia de 2021, carga numerosas mochilas: su pésimo gobierno, su vergonzosa corrupción, su compromiso con la impunidad y, sin duda, el autogolpe, expresión de desprecio absoluto por la democracia, cara y sello de la tesis fraudista. Pero, además, el fallido autogolpe supuso ceder el poder que le dio el pueblo a los derrotados de las elecciones a cambio de nada. O, mejor dicho, a cambio de pasar a la historia como un golpista para evitar pasar como un corrupto, y luego subirse a la coalición gobernante —encabezada por sus mismos adversarios políticos— como comparsa en la degradación ética, institucional y política que le han propinado al país. Salvo honrosas excepciones, la izquierda ha sido parte entusiasta o resignada en esta travesía, o ha callado en todos los idiomas, sin autocrítica alguna ni propósito de enmienda. Empero, el voto identitario andino que llevó a Castillo a la presidencia sigue indignado, embroncado, esperando a su candidato,

como en 2021. No se ha ido masivamente al centro ni a la derecha, al menos hasta ahora. No se puede descartar que encuentre a quien lo represente, si no es en las filas de la izquierda, fuera de ellas. No hay que olvidar que a Castillo le bastó el 15.4 % del voto para pasar a la segunda vuelta y a Keiko Fujimori, solo el 10.9 %.

Además del clivaje que opone a costeños y andinos, que con facilidad se yuxtapone con el ideológico de derecha e izquierda, hay otro que podría ser tan o más importante en abril de 2026. Es el que opone a quienes están en el poder y a quienes no lo están, a los que quieren seguir gobernando y a quienes aspiran a reemplazarlos; para utilizar un anglicismo, a los incumbentes y a los antiincumbentes. Hoy este clivaje separa a los partidos del Pacto de gobierno de quienes no son parte de él, especialmente de quienes son sus abiertos opositores. Ese es hoy el clivaje fundamental en la política latinoamericana y mundial. Por el rápido desgaste del



Estamos, pues, ante un escenario más bien proclive a las sorpresas, a los *outsiders*, en el que cualquiera podría ganar, especialmente alguien que aún no aparece como posible vencedor. **La pregunta es quién podría ser esa sorpresa.**

necesite sus votos. Contar con la más alta popularidad en la izquierda es su principal fortaleza. Ya hay muchos candidatos buscando ese voto, y no solo en ese sector político. Está por verse qué tan significativo es ese caudal electoral y si es realmente endosable.

Abona a este hipotético desenlace el que 42 % de los electores aún no ha optado por ningún candidato, otra expresión del malestar reinante. En principio, esta insatisfacción podría ser aprovechada por el castillismo, pero ningún candidato de izquierda aparece en las

ejercicio del poder en las sociedades contemporáneas, son muy pocas las elecciones en democracia en las que la oposición no gana, a condición, claro está, de que esta exista. Es, en el fondo, la alternancia en el poder, principio fundamental de la democracia representativa.

A pesar de su inmensa impopularidad, la coalición gobernante no tiene oposición política, solo cívica y social: desde hace año y medio, los transportistas y las víctimas de la violencia extorsiva, además de los jóvenes de la Generación Z que se les sumaron más recientemente. ¿Qué explica este extraño fenómeno de un gobierno casi unánimemente rechazado sin una oposición alternativa? Las causas son múltiples: la violenta represión de las protestas que siguieron al fallido autogolpe de Castillo; el que casi todo el elenco estable de la política nacional sea parte del Pacto, integrado por los doce partidos con representación parlamentaria; el que los nuevos partidos sean casi todos jóvenes, en proceso de formación, con líderes poco experimentados en lides electorales; el que la desafección no los favorezca, pues el rechazo a la política los alcanza por igual que a los incumbentes.

Mientras los partidos con más recorrido tienen rostros y marcas conocidas, estructuras afiatadas y fuentes de financiamiento, los nuevos deben darse a conocer y construir sus capacidades en medio de una competencia feroz por el número excesivo de organizaciones y un público desinteresado y desconfiado. Por último, tampoco los ayuda que, en su mayoría, hayan optado por priorizar lo electoral y desdeñar la política coyuntural, el único espacio desde donde puede capitalizarse el malestar, quizá por temor a las represalias del ecosistema de desinformación del Pacto, un poder comunicacional arbitrario y sin escrúpulos que descalifica a adversarios y destruye reputaciones a partir de la mentira.

Es con los preparativos de la campaña que Martín Vizcarra se perfila como claro opositor electoral. A la defensiva por tres inhabilitaciones y un año de juicio oral que acaba de concluir con una sentencia condenatoria a 14 años de prisión por solicitar y recibir sobornos cuando fue gobernador de Moquegua, optó por lanzar al ruedo a su hermano Mario. Su única virtud es la de llevar su apellido y ser de su entera confianza, pues tienen décadas como socios en M & M Vizcarra, la empresa constructora familiar. La jugada le viene funcionando, porque, con 7 % desde septiembre pasado, Mario

le disputa el segundo lugar a Fujimori (8 %), pese a que apareció en las encuestas recién en julio pasado con un 2 %.

Por ahora, Vizcarra parece ser el mejor representante del voto opositor debido al solo hecho de concentrar las iras del Pacto que se ganó principalmente por la disolución del Congreso de mayoría fujimorista el 30 de septiembre de 2019, aunque, según el Tribunal Constitucional de entonces, fue ajustado a la carta magna. Pero, como Castillo, Vizcarra tiene sus mochilas, sobre todo una sentencia condenatoria que lo mantendrá un buen tiempo alejado de la política activa, seguramente conspirando para recuperar su libertad. En el corto plazo eso no ha impedido que su hermano se posicione expectanamente, pero en adelante podría dificultar su ascenso, aunque difícil saberlo con las mochilas que cargan sus actuales contendores principales. Esta es una muestra del lamentable estado de la política peruana y de las dificultades que entraña su renovación, que pasa necesariamente por el rescate de la ética y la integridad pública.

La mayoría de los que se inclinaban por Vizcarra en las encuestas pensaban que el candidato era Martín. Esa confusión comenzará a diluirse con su entrada a la cárcel y la mayor exposición pública de su hermano; sería entonces cuando la candidatura de los Vizcarra podría perder fuerza, sobre todo si aparece una alternativa entre otros candidatos opositores como López Chau en la izquierda, Belaunde en el centro o Espá en la derecha. No se excluye la posibilidad de que surjan otros, pero, entre los mejor colocados, el resto de los aspirantes presidenciales representan a partidos que integran el Pacto (López Aliaga, Fujimori, Acuña, Forsyth, Butters y Barnechea) o son cercanos a ellos, como Carlos Álvarez —comediante en su momento vinculado a Fujimori y Montesinos— y Javier Velásquez (APRA).

Gracias a su captura de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el APRA ha promovido el retorno de la destituida Patricia Benavides, suspendido a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y desacatado una orden judicial para reponerla, en lo que constituye el penúltimo capítulo de la captura de la Fiscalía por el Pacto. El último es la amenaza del Congreso de destituir a cuatro de los seis fiscales supremos, precisamente los que no tienen cuestionamientos éticos ni funcionales, especialmente a Espinoza. Todo esto

demuestra que el avance del cronograma electoral no ha detenido, ni detendrá, la degradación institucional que continúa a velocidad de crucero oculta bajo el histriónico activismo del flamante presidente José Jerí y la indiferencia o la complicitad de buena parte de nuestras élites.

La situación es tan grave que las cinco instituciones de derechos humanos más importantes de Estados Unidos acaban de hacer un llamado urgente a la comunidad internacional a adoptar medidas inmediatas «para impedir el deterioro irreversible de la democracia peruana». Afirman que el abuso del control político por el Congreso, sumado a las leyes procrimen, no solo amenaza la independencia de la Fiscalía, sino también su capacidad de combatir el crimen organizado, afianzado en las más altas esferas del poder político, e incluso pone en peligro la integridad del próximo proceso electoral.

Es un lenguaje inusualmente descarnado para describir una situación particularmente preocupante, donde confluyen la corrupción en el poder, el *boom* de las economías ilícitas y el desborde de la violencia delincuencial con el acelerado desmantelamiento de los pesos y los contrapesos de una sociedad cada vez menos abierta y democrática, crecientemente sometida a las mafias y a la arbitrariedad de su poder. Hoy estamos más lejos que nunca de la OCDE —el club de democracias de mercado más avanzadas del mundo al que intentamos integrarnos desde el 2012— y nos parecemos más a los régimes autoritarios de la región, como Venezuela.

Por eso, los próximos comicios no son una elección cualquiera: son la última oportunidad de detener y revertir una deriva autoritaria que avanza sin freno. Cinco años adicionales del orden construido por el Pacto terminarían de barrer con el Estado de derecho, el equilibrio de poderes y el respeto a los derechos humanos, y arrasarían también con la estabilidad macroeconómica,

en particular el equilibrio fiscal. Ni qué decir del daño que la competencia desleal de los negocios ilícitos le causa a nuestra economía de mercado, ya sometida a la presión asfixiante de las extorsiones y la violencia, que no tienen cuándo acabar debido a la negativa de


El Perú se encuentra en una encrucijada histórica que **solamente será superada con una renovación generacional y ética de sus liderazgos**. Ojalá que emerjan en estas elecciones para rescatarnos de la ruina moral en que nos deja el Pacto.


Dina Boluarte, José Jerí y el Congreso a abandonar las contraproducentes políticas de seguridad y justicia del último quinquenio.

Ni los candidatos de los partidos que integran el Pacto, dos de los cuales encabezan las encuestas; ni el vizcarrismo que ocupa el tercer lugar; ni el castillismo que podría ser sorpresa si aparece un candidato identitario andino, garantizan el cambio. De alguna manera, todos encarnan la continuidad del régimen: los primeros, porque son sus arquitectos y su propósito es perpetuarlo; los segundos, porque comparten con el Pacto lo esencial (la falta de integridad y la búsqueda de impunidad). Por eso buscan indultos para obtener su libertad.

El Perú se encuentra en una encrucijada histórica que solo será superada con una renovación generacional y ética de sus liderazgos. Ojalá que emerjan en estas elecciones para rescatarnos de la ruina moral en que nos deja el Pacto. Ojalá que la honda y masiva indignación ciudadana frente a quienes nos gobernaron el último quinquenio produzca la sorpresa que necesitamos para recuperar la esperanza en nuestro proyecto republicano e, inspirados en Jorge Basadre, reanudemos la construcción de la promesa de la vida peruana.